

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a decidir el recurso de APELACIÓN de la sentencia de primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA EUGENIA FIGUEROA DE CARMONA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-003-2018-00639-01**.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

La actora pretende con la demanda, el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el 15 de agosto de 2009 hasta la fecha en que se empiece a pagar de forma efectiva la pensión de invalidez, con la mesada adicional de junio y diciembre, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas procesales.

**Como fundamentos fácticos de sus pretensiones**, relata la demandante que el 7 de diciembre de 2017 elevó petición de pensión de invalidez ante COLPENSIONES por considerar que cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley, petición que inicialmente no fue aceptada por COLPENSIONES hasta tanto no se allegara la certificación de la EPS con el pago de la última incapacidad o de no pago de incapacidades, y que posteriormente mediante Resolución N° SUB- 298136 de 2017 COLPENSIONES le reconoce la pensión de invalidez en cuantía de \$737.717, al 01 de enero de 2018, sin embargo, dejó suspendido el ingreso a nómina hasta que se allegara sentencia judicial de curaduría o guarda y acta de posesión.

Aduce que al no determinarse una fecha precisa a partir de la cual se le reconoce la causación de la pensión, no se pudo determinar el retroactivo de la pensión de

invalidez que por ley le correspondería, por lo que el 27 de enero de 2018, apela la resolución N° SUB- 298136 de 2017 solicitando que se le reconozca la pensión desde la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el 15 de agosto de 2009, al no tener reconocida ni pagada incapacidad alguna por enfermedad común por parte de la EPS, sin que haya operado el fenómeno de la prescripción de las mesadas dado que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, solo lo conoció el 4 de septiembre de 2017, fecha en que fue expedido.

Señala que el 10 de febrero de 2018, mediante Resolución DIR 2954 COLPENSIONES respondió el recurso de apelación confirmando la resolución N° SUB- 298136 de 2017 con fundamento en el concepto interno BZ 2014-10721634 del 26 de diciembre de 2014. Indica que al no reconocerle el retroactivo pensional, hay lugar a los intereses moratorios desde el 29 de diciembre de 2017 fecha de expedición de la resolución que le reconoció el derecho a la pensión y hasta que se haga el pago efectivo del retroactivo pensional.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del cuatro (04) de agosto de 2020, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda, señalando que la señora María Eugenia Figueroa de Carmona se le dictamino pérdida de capacidad laboral del 85%, con fecha de estructuración el 15 de agosto de 2009, sin que dentro de los 3 años anteriores a dicha pérdida de capacidad laboral, tenga 50 semanas cotizadas, circunstancia por la que no prospera la pretensión de reconocer, liquidar y pagar pensión de invalidez de origen común del 15 de agosto de 2009 al 1 de enero de 2018. Continuó argumentando la juez, que la enfermedad padecida por la demandante no es de carácter degenerativo, asintomático, sino que fue de carácter severo que la imposibilitó laboral desde el mismo instante en que sufrió el accidente cerebro cardíaco vascular, el día 15 de agosto de 2009, razón por la cual absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra, declarando prospera la excepción de inexistencia de causa para pagar retroactivo pensional. Costas procesales a cargo de la parte demandante.

## **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

La anterior decisión fue apelada por el apoderado de la demandante, argumentando que en el momento en que se realizó la petición de pensión de invalidez por la demandante se conocía que está no cumplía con el requisito de las 50 semanas en

los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, sin embargo, la demandante antes de la fecha de estructuración contaba con más de 600 semanas y tenía más de las 26 semanas en cualquier época, y más de 300 semanas con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que le daba el derecho a tener la pensión de invalidez con aplicación del principio de la condición más beneficiosa, aunque COLPENSIONES no la haya reconocido con dicho principio, en ese sentido se interpuso el recurso de apelación contra la resolución que le otorgó a la actora la prestación, sin embargo lo anterior no fue tenido en cuenta y se mantuvo la decisión por parte de la administradora de no reconocimiento de retroactivo.

Señala que bajo el principio de la condición más beneficiosa la actora a la fecha de estructuración de su invalidez que fue el 15 de agosto de 2009, cumplía con los requisitos necesarios para adquirir una pensión, bajo los citados presupuestos constitucionales en aplicación de la Ley 100 de 1993 o del Decreto 758 de 1990 en su artículo 6º, por lo anterior, considera que es totalmente procedente el retroactivo pensional, pues la enfermedad de la demandante no fue degenerativa, fue un accidente cerebrovascular de tipo inminente que la dejó con una pérdida de la capacidad laboral en más del 85% de manera intempestiva y total desde el momento del accidente, y que aunque el reconocimiento que hizo COLPENSIONES como una enfermedad catastrófica y degenerativa no tiene razón, se está de acuerdo con el reconocimiento de la pensión al cual tenía derecho la actora desde el momento de estructuración del accidente.

Indica que aunque COLPENSIONES aplico de manera indebida sus conceptos, debe tenerse en cuenta que la parte central del litigio no es la determinación si tenía o no derecho, pues este ya fue reconocido por COLPENSIONES, por lo que parte central es si tiene derecho o no al retroactivo pensional, pues efectivamente las normas mencionadas determina que el reconocimiento del retroactivo pensional procede desde el momento mismo de la estructuración de la invalidez o en su defecto desde el último pago de incapacidades, situación esta última que no se generó, siendo procedente entonces el reconocimiento desde la fecha de estructuración.

Manifiesta que teniendo en cuenta la mora en la decisión por parte de COLPENSIONES del reconocimiento de la pensión, son procedente los intereses de mora deprecados.

#### **4. LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales de la DEMANDANTE y COLPENSIONES allegaron escritos de alegaciones, en los que señalan resumidamente lo siguiente:

## **ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.**

El alegato de conclusión consistirá en el análisis de tres elementos claves soportes de este escrito a saber: 1. La causación de la pensión de invalidez de origen común en el sistema general de pensiones colombiano; 2. La inaplicación de la prescripción de mesadas pensionales a las personas con discapacidad mental absoluta y 3. La causación de intereses moratorios.

### **1. LA CAUSACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMÚN EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES COLOMBIANO.**

Para determinar la causación de la pensión de invalidez de origen común en el sistema general de pensiones Colombiano, tienen como parámetro objetivo inicial la fecha de estructuración de la enfermedad común determinado por el mismo fondo de pensiones o por las juntas regionales o nacional de calificación de invalidez.

Esta causación está determinada por La ley 100 de 1993 artículo 40 último inciso que expresa: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.”*(negrillas por fuera del texto), cuando se hace referencia a tal estado, es a la fecha en que se determina pericialmente cuando se inició el estado de incapacidad laboral.

Otra norma de superior jerarquía al mencionado concepto interno de COLPENSIONES es el Decreto 917 de 1999 en su artículo 3º reglamenta y condiciona la causación de la pensión de invalidez de origen común de la siguiente forma: *“FECHA DE ESTRUCTURACIÓN O DECLARATORIA DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”* (negrilla por fuera del texto), con lo cual condiciona la causación de la pensión de invalidez de origen común a partir de la fecha de estructuración, siempre y cuando no hubiese recibido el beneficiario un

subsidio o pago de incapacidad temporal en razón de la misma enfermedad común que origina la pensión de invalidez, situación que obliga a la AFP a reconocer como causación de la pensión de invalidez el día siguiente a la fecha del último subsidio recibido.

Con lo anterior quedó demostrado que al no haber recibido subsidio o pago por concepto de incapacidad laboral posterior a la fecha de la estructuración de su enfermedad común que generara una incompatibilidad con la pensión de invalidez, la fecha real de causación de la pensión de invalidez de origen común de la demandante es en consecuencia el **15 de agosto de 2009 o sea la misma fecha de estructuración de la enfermedad.**

## 2. LA INAPLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE MESADAS PENSIONALES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA.

El Código Civil Colombiano en su artículo 2530 modificado por el artículo 3ro de la ley 791 de 2002 expresa en favor de quienes se suspende la prescripción de la siguiente manera: *"....La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría....No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista".*

La demandante señora MARIA EUGENIA FIGUEROA DE CARMONA con el accidente cerebrovascular que sufrió el día 15 de agosto de 2009 tuvo como secuelas inmediatas una disfunción hemisférica izquierda, además, cuando fue evaluada por a AFP para el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, el dictamen emitido por esta entidad expresó: "paciente ingresa en silla de ruedas, camina solo con ayuda de bastan para trayectos cortos para levantarse de la silla al baño, es dependiente para el baño, vestido, alimentos, higiene mayor, último episodio convulsivo hace 3 años, crisis de ausencia constante EF: afásica, alerta, disártrica, anártrica, responde incoherencia, no controla esfínteres con evidencia hemiparesia derecha CP: rscsrs pulmonar: mv presente acp, abdomen: normal ext. con presencia de cortesis msi derecho, mano en garra derecha".

Y en otras interconsultas/fundamentos rol laboral/ocupacional: se observó: "neurología 16/05/2017: ap hta, hipotiroidismo, acb acmi en agosto de 2009 toast indeterminado, secuelas emiplegia, afasia motora, no logra marcha, epilepsia focal sintomática refractaria, depresión, toma FNB, LVT, rivaroxabán, exitalopran, levotiroxina,

omeprazol, ácido fólico, rxs apertura ocular derecha rot+++ derecho, babinski derecho, marcha no evaluable, análisis: acv acmi en agosto de 2009 toast indeterminado, secuela emiplegia derecha, afasia motora, no logra marcha, epilepsia focal sintomática refractaria en manejo con levetiracetan cada 8 horas sin recurrencia de crisis, depresión mayor.”

Todo ello le sumó un porcentaje final de pérdida de capacidad laboral del **85.39%** (o sea con una funciones mentales y vitales mínimas), además de ello en el dictamen se determina que SI requiere de terceras personas para “**la toma de decisiones**” lo que significa una DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA, siendo igualmente esta misma la conclusión a la que llega el Juzgado Quince (15) de Familia en Oralidad de Medellín en la sentencia No. 0224 del 22/10/2018 en la cual se le decretó la Interdicción definitiva por discapacidad mental absoluta de la señora MARIA EUGENIA FIGUEROA DE CARMONA y se le designa como Curador General a su esposo el señor MIGUEL ÁNGEL CARMONA.

Con lo anterior se desprende que desde el mismo día del accidente cerebro vascular de la señora MARIA EUGENIA FIGUEROA DE CARMONA, se le generó una condición físico mental calificada como DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA lo que la clasifica como una de aquellas personas descritas en el Código Civil Colombiano en su artículo 2530 modificado por el artículo 3ro de la ley 791 de 2002 en contra de las cuales no se puede correr término de prescripción alguno.

Aunado a lo anterior, es menester traer a colación la tesis expuesta por la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral ( Sentencias SL5703-2015, SL 19 SEP. 2006, RAD.29417 Y SL 17 OCT. 2018, RAD. 2882) según la cual para establecer la prescripción de las mesadas derivadas de la pensión de invalidez, se requiere del conocimiento pleno del peticionario acerca de su estado de invalidez mediante un diagnóstico médico, científico y competente de acuerdo a la ley para que sea vinculante por parte del Fondo de Pensiones, dictamen que en el caso de la señora MARIA EUGENIA FIGUEROA DE CARMONA fue elaborado el día **lunes, 04 de septiembre de 2017** bajo el No. 2017234614DD en primera y única oportunidad, y comunicado mediante oficio suscrito por la médica laboral Lina MARIA Loaiza Ochoa CC 43722544 sin fecha de referencia del envío como se observa en la documentación aportada como prueba.

En conclusión y bajo la tesis expuesta por la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, no opera el fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales para el presente caso.

### **3. LA CAUSACIÓN DE INTERESES MORATORIOS.**

La Ley 100 de 1993 en el artículo 141 establece los intereses por mora a cargo de los fondos de pensiones de la siguiente manera: “A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.”

El análisis extendido e interpretativo que se ha dado de este artículo se ha fundamentado en el hecho de que los intereses por mora solo proceden cuando el reconocimiento y pago de la pensión por parte de los Fondos de Pensiones no se ha realizado dentro de los términos estipulados por la ley para cada riesgo que administra, así se tiene que el término para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez es de cuatro meses, mientras que para las pensiones de invalidez y muerte el término para el reconocimiento y pago es de dos meses, todos estos términos deben ser contabilizados a partir de la reclamación efectuada por el beneficiario de cada pensión.

Por tanto es claro que si en una instancia judicial como la presente llega a concluir que efectivamente la demandante tiene derecho al reclamo o pretensión que siempre ha estado solicitando y se le ha negado de forma dudosa como lo es un retroactivo pensional, inmediatamente queda en evidencia el Fondo de Pensiones sobre que la pensión a pesar de haber sido reconocida en forma oportuna, no fue reconocida en forma correcta lo que genera la mora en las mesadas no reconocidas o en la parte de la pensión mal liquidada y que efectivamente obliga al fondo al reconocimiento de los intereses moratorios.

### **ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

Solicito respetuosamente se confirme la sentencia de primera instancia por medio de la cual se absolvió a mi representada de todas las pretensiones incoadas por la parte demandante y para ello le pido al Honorable Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral, tener en cuenta lo siguiente:

El fenómeno extintivo de la prescripción se encuentra regulado expresamente en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo un término trienal para el efecto. En tal sentido, la prescripción radica en la tardanza en el ejercicio de la acción durante el lapso consagrado en las leyes para tal efecto, lo que hace presumir el abandono del derecho, cuyo efecto no es otro que la improductividad de la acción tendiente a reclamar el derecho.

Por último, el **artículo 141 de la ley 100 de 1993** establece lo siguiente:

“Intereses por mora. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.”

La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- no está obligada a pagar intereses de mora puesto que, la entidad no se encuentra en mora en el pago de mesadas pensionales, pues como se ha dicho anteriormente, la Señora BERNARDO ANTONIO GALVIS MUÑETON, no tiene relación jurídica alguna con la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por lo que no se debe el pago de prestación alguna, además de lo anterior, el pago de dicha sanción solo procede cuando hay prestaciones debidamente reconocidas por parte de la entidad y respecto de las cuales existe retardo en el pago de las mismas, por esto, al demandante no se le debe el pago de ninguna mesada pensional.

Y si en gracia de discusión se considerara condenar a la Entidad al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por las **sentencias T-588 del 2003, C-1024 del 2004 Y la SU-065 del 2018**, las cuales son unánimes en indicar que los intereses moratorios empiezan a causarse a partir del sexto mes siguiente de la solicitud del reconocimiento pensional.

## 5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico se circunscribe a determinar si a la actora le asiste derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el 15 de agosto de 2009, fecha de la estructuración de la invalidez, y si de tener derecho al mismo son



procedentes los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes:

## **6. CONSIDERACIONES:**

La Sala se ocuparse del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”.

No es materia de controversia entre las partes en esta instancia, que la demandante encontrándose afiliada al RPM administrado por Colpensiones, mediante dictamen del día 4 de septiembre de 2017, se le determinó por parte de esta entidad, una pérdida de capacidad laboral del 85,39% con fecha de estructuración del 15 de agosto de 2009, a raíz de un accidente cerebro vascular (02.ExpedienteDigital folios 26 a 32). Igualmente se encuentra probado que la demandante reclamó la pensión de invalidez el 7 de diciembre de 2017, prestación que le fue reconocida mediante Resolución SUB No. 298136 del 29 de diciembre de 2017, indicando que si bien no contaba con las semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, esto es, 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez, se tenía en cuenta que la enfermedad de la reclamante era catalogada como crónica, degenerativa y progresiva, por lo que atendiendo el concepto interno BZ 2014 107 21 634 del 26 de diciembre de 2014, la demandante acredita 50 semanas con antelación a la fecha de la calificación de la invalidez, esto es 4 de septiembre de 2017, razón por la cual le otorgó el derecho pensional en cuantía de \$737,717 a partir del 1 de enero de 2018, expresando que sería reajustado el monto al momento del ser cancelada, dejando en suspenso el pago de la prestación hasta que se aportara la sentencia donde se le nombrara curador a la pensionada, quien de conformidad con el dictamen necesitaba de una tercera persona para valerse de si misma. (02. Expediente Digital Folios 37 a 45)

No conforme con la decisión, la accionante interpuso el recurso de apelación contra la citada Resolución, el 27 de enero de 2018 ((02.ExpedienteDigital folios 46 a 54),

indicando que la pérdida de capacidad laboral se dio a raíz del accidente cerebro vascular que le generó de manera inmediata la invalidez, por lo que el derecho se debe consolidar desde la estructuración, teniendo en cuenta que no medio incapacidad con posterioridad a la citada fecha.

Ante este recurso, Colpensiones emitió el acto administrativo No. DIR 2964 del 10 de febrero de 2018, por medio del cual se confirmó la decisión inicial, indicando que la prestación se reconoce a partir del 1 de enero de 2018, teniendo en cuenta que la última cotización efectuada al sistema pensional por parte de la señora Figueroa, data del mes de diciembre de 2017, así que al padecer la actora una enfermedad progresiva, es este el punto de partida para el reconocimiento pensional (02. Expediente Digital folios 55 a 62)

Conforme lo anterior, el punto objeto de controversia en el presente proceso, acorde a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se sintetizan en determinar si a la demandante le asiste derecho al retroactivo pensional desde la fecha de estructuración de la invalidez, esto es el 15 de agosto de 2009, teniendo en cuenta para ello los presupuestos, bien sea de la Ley 100 de 1993 en su versión original o del Decreto 758 de 1990, aplicando el principio constitucional de la condición más beneficiosa.

Leída la demanda, se halla que en los fundamentos de derecho se indicó que la actora tendría derecho a la pensión aplicando el principio de la condición más beneficiosa, aspecto que no fue analizado por la *a quo*, por lo que al haberse planteado tal asunto en la demanda y en la apelación es viable su estudio en esta instancia.

No existe discusión en que la demandante María Eugenia no cumple con los requisitos de la Ley 860 de 2003, para acceder a la pensión de invalidez, ya que la estructuración de esta invalidez como se ha dicho con antelación data del 15 de agosto de 2009, por lo que contando 3 año hacía atrás, esto es al 15 de agosto de 2006, la actora cuenta con solo 32 semanas cotizadas en este interregno, como se observa en la historia laboral inserta en el expediente administrativo archivo GRP-SCH-HL-6655444333 folios 1 a 8.

Igualmente debemos advertir que la invalidez de la actora contrario a lo indicado por la AFP Colpensiones en el acto administrativo SUB No.298136 del 29 de diciembre de 2017 que le otorgó la prestación de invalidez, tampoco deviene de una enfermedad degenerativa y progresiva, sino que la invalidez de la señora María Eugenia conforme

se lee del dictamen pericial No. 201723461400 del 4 de septiembre de 2017, surge a raíz de un evento único e inmediato, como es el accidente cerebro vascular sufrido por la asegurada el 15 de agosto de 2009, requiriendo de la ayuda de un tercero para el normal desarrollo de sus actividades básicas y toma de decisiones, por lo que en este caso no se puede como de manera acertada lo indicó el *a quo*, aludir a la capacidad laboral residual, pues la demandante perdió su capacidad laboral en el mismo momento que sufrió tal accidente.

Ahora bien, la apoderada de la parte actora insiste en el recurso de alzada que la causación del derecho pensional a favor de su representada ocurrir desde la fecha de estructuración de la invalidez (15 de agosto de 2009), teniendo en cuenta para ello la aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, presupuestos normativo con los que indica que su representada cumple los presupuestos de las semanas cotizadas, bien sea con Ley 100 de 1993 o el Decreto 758 de 1990.

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa conforme la actual línea jurisprudencial de la SCL de la CSJ, en tratándose de pensión de invalidez, para que pueda acudir a normas anteriores a la vigente al momento de estructurarse el estado de invalidez para otorgar la citada prestación aplicando el principio en comento, resulta imperioso que la estructuración del estado de invalidez haya tenido lugar dentro de los 3 años posteriores a la entrada en vigencia de la citada Ley 860 de 2003, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, requisito que no cumple la demandante pues la estructuración de la invalidez como de manera reiterada se ha indicado, tuvo lugar el 15 de agosto de 2009, esto es, por fuera de la temporalidad esgrimida por la CSL de la CSJ. Aunado a ello tampoco contaba la actora con las 26 semanas cotizadas en el año anterior a entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, ni en el año anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez, es decir entre el 15 de agosto de 2009 y ese mismo día y mes del 2008, lapsos en los que cuanta con cero semanas cotizadas, pues en su historia laboral (ExpedienteAdministrativo0320180639 archivo adGRP-SCH-HL-6655444333 folios 1 a 8), presenta cotizaciones hasta el ciclo diciembre de 1999 y las retoma en marzo de 2007 hasta el mes de noviembre de 2007 suspendiendo las cotizaciones retomándolas en diciembre de 2012.

Ahora, de vieja data la jurisprudencia de la SCL de la CSJ tiene establecido que para aplicar el principio de la condición más beneficiosa sólo es posible acudir la norma anterior a la vigente a la estructuración de invalidez del causante, en este caso que

nos ocupa, a la original Ley 100 de 1993 sin que sea posible dar saltos normativos a otras leyes anteriores, por lo que en aplicación de la referida jurisprudencia, no es posible que la actora pueda acceder a la pensión bajo las reglas del Decreto 758 de 1990.

Igualmente, es relevante traer a colación la sentencia SU-556 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la que se evidencia que dicha corporación luego de realizar un análisis de las posiciones jurisprudenciales que una y otra Corte han desarrollado en los últimos años con relación al principio de la condición más beneficiosa, concluyó que, en cuanto al tránsito legislativo ocurrido entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que **la temporalidad** en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no es irrazonable, e indicó además que luego de la expedición de la sentencia SU-442 de 2016, la Corte Constitucional ha señalado que *“la zona de paso”* fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral<sup>1</sup> no es contraria la Constitución<sup>2</sup>, dado que, como se señaló en aquella providencia, se fundamenta en *“uno de los principios constitucionales que informan el derecho irrenunciable a la seguridad social [...], esto es el de la condición más beneficiosa, un principio que, como se mencionó, se justifica en el artículo 53 superior y, además, surge a partir de prerrogativas del mismo rango como ‘el derecho constitucional de toda persona a que se protejan sus expectativas legítimamente forjadas’*<sup>3</sup>.

Rememora además la alta Corporación que en la sentencia SU-005 de 2018, la Corte advirtió que *“un alcance distinto (entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia) del principio de la condición más beneficiosa en materia de la pensión de sobrevivientes’, no deriva en la inconstitucionalidad del derecho viviente de la jurisprudencia ordinaria laboral en la materia”*<sup>4</sup>.

Concluye entonces la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-556 de 2019, que la regla fijada en la sentencia SU-442 de 2016, según la cual el principio de la condición más beneficiosa da lugar a que se apliquen de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a aquellos afiliados cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, solo es aplicable a los afiliados-tutelantes en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellos que superen el test de

---

<sup>1</sup> Definidas en la sentencia SL-2358 de 2017.

<sup>2</sup> Sentencia T-545 de 2019.

<sup>3</sup> Sentencia SU-442 de 2016.

<sup>4</sup> Sentencia SU-005 de 2018.

procedencia contenido en dicha providencia, dado que solo respecto de estas personas es evidente una afectación intensa a sus derechos fundamentales.

Se quiere significar con lo anterior, que la tesis que venía pregonando la Corte Constitucional en el sentido de admitir la aplicación del principio de la condición más beneficiosa acudiendo al Decreto 758 de 1990 aun cuando la invalidez del afiliado se hubiera producido en vigencia de la Ley 860 de 2003, solamente se podrá seguir aplicando siempre que supere el denominado test de procedencia. Test que comprende 4 condiciones, pero no se hace posible para la Sala abordar su análisis frente a la situación de la actora, por tratarse de un asunto nuevo que no se litigó al interior del proceso que ocupa la atención de esta Sala de Decisión, pues la Sentencia SU-556 de 2019, fue proferida con posterioridad a la presentación de la demanda, y por ello no fue objeto de contradicción por las partes, ni de despliegue probatorio alguno, por lo que la Sala no cuenta con elementos de juicio para decidir.

No es de más advertir, que la Sala deja claro que el hecho que a la demandante no se le reconozca el retroactivo pensional deprecado en este proceso, por las razones antes indicadas, para nada implica que el reconocimiento pensional efectuado por Colpensiones deje de seguir subsistiendo por efecto de las decisiones de este proceso.

Así las cosas, de acuerdo a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia recurrida deberá ser confirmada íntegramente.

Costas en esta instancia a favor de COLPENSIONES y a cargo del demandante por haber resultado vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia del cuatro (4) de agosto de 2020, proferida por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **MARIA EUGENIA**

**FIGUEROA DE CARMONA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, conforme lo expuesto en esta sentencia de segunda instancia.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a favor de COLPENSIONES y a cargo del demandante. Las agencias en derecho las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fadfa39d699b0a9258e7f19c2bebb1b109f8af00408d43aefe1b80b93d17cb93**

Documento generado en 11/05/2023 03:14:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>